

**T.S.J.ASTURIAS SALA CIV/PE
OVIEDO**

000009/2022

-C/SAN JUAN, S/N- OVIEDO

Teléfono: 985988411

Correo electrónico:

Modelo: 426500

N.I.G.: 33044 31 2 2022 0000009

Refª.- DPA DILIGENCIAS PREVIAS 0000013 /2022

Sobre: DELITO SIN ESPECIFICAR

Denunciante/querellante: MINISTERIO FISCAL, MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ

Procurador/a: D/Dª ,

Abogado/a: D/Dª ,

Contra: PABLO GONZALEZ MENENDEZ

Procurador/a: D/Dª

Abogado/a: D/Dª

AUTO

Excmo. Sr. Presidente

D.JESUS MARIA CHAMORRO GONZÁLEZ

Ilmos. Sres. Magistrados

D. IGNACIO VIDAU ARGÜELLES

D. JOSÉ IGNACIO PÉREZ VILLAMIL

En OVIEDO, a Tres de Mayo de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En este órgano judicial se ha recibido Exposición Razonada elevada por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón en virtud de denuncia interpuesta por Don Miguel Angel Delgado González, contra Don Pablo González Menéndez, Diputado de la Junta General del Principado de Asturias.

SEGUNDO.- Por Diligencia de Ordenación, de 13 de Abril de 2022, se tuvieron por recibidas las precedentes actuaciones, registrándose como Diligencias Previas nº 13/2022, y conforme al turno establecido se designó ponente al Excmo. Sr. Magistrado Don Jesús María Chamorro González.



PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Firmado por: JESUS MARIA CHAMORRO
GONZALEZ
03/05/2022 11:45
Minerva

Firmado por: IGNACIO VIDAU
ARGUELLES
03/05/2022 13:03
Minerva

Firmado por: JOSE IGNACIO PEREZ
VILLAMIL
03/05/2022 13:17
Minerva

Posteriormente por Diligencia de Ordenación, de 20 de Abril se recaba informe del Ministerio Fiscal.

TERCERO.- El Ministerio Fiscal emitió informe, solicitando que se devolvieran las actuaciones al Juzgado de procedencia para que instruyera la causa, hasta que existan indicios de responsabilidad contra un aforado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- Vista la exposición razonada elevada por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón, y toda vez que no consta contrastada de lo actuado la existencia de indicios racionales de comisión de un delito por parte de persona aforada, en este momento procesal ni tampoco la necesidad de realizar actos procesales de investigación que afecten directamente a persona aforada alguno, procede devolver las actuaciones al órgano judicial de origen, para que se siga en el mismo las diligencias de instrucción que se consideren convenientes y conformes a derecho.

La jurisprudencia avala esta decisión y así la STS 277/2015 señala que *"La respuesta a este interrogante está marcada por unas referencias legislativas que no proporcionan luminosidad, sino más bien sombras en su definición. El art. 309[LECrim.] habla genéricamente de situaciones procesales en las que "resulten cargos" contra un aforado. Del tenor de tal precepto se infiere por otra parte que será ese el momento en que deba "dirigirse el procedimiento" contra el aforado paralizando la instrucción y dando cuenta al Tribunal Superior. El art. 303 LECrim alude a delitos que "por su naturaleza... solamente pueden cometerse por Autoridades o funcionarios sujetos a un fuero superior".*

Se podría pensar que desde el momento en que exista la más nimia alusión frente a un aforado que no haya sido rechazada frontalmente por los motivos previstos en el art. 269 LECrim (no ser los hechos constitutivos de delito o resultar

manifiestamente falsos), el fuero deberá operar, sin perjuicio de que en caso de un eventual archivo o sobreseimiento respecto del aforado las actuaciones sean devueltas al juez o tribunal ordinarios. Los arts. 272.2º LECrim y 132 CP alentarían esa interpretación.

Muy distinta es la tónica que se ha impuesto en la jurisprudencia y que ha contagiado al legislador (art. 118 bis introducido por Ley Orgánica 7/2002, de 5 de julio).

La jurisprudencia ha evolucionado hacia un nivel de indicios cualificado. Se opta por un criterio restrictivo a la hora de aceptar la competencia por implicación de un aforado especialmente cuando se trata de causas seguidas también contra no aforados. No se fija la competencia de la Sala Segunda más que cuando se comprueba que existen indicios sólidos de responsabilidad frente a un aforado. No basta cualquier sospecha o conjetura. No son suficientes las posibilidades, más o menos cercanas, o las alusiones indirectas.

Paradigmático en esta línea evolutiva fue el ATS de 13 de enero de 1995 (Causa especial 2760/1994). Para asumir la competencia deben aparecer fundados y claros los indicios de responsabilidad del aforado [...].

En la misma línea se movía el auto de 2 de diciembre de 1994 (causa especial 2990/1994).

Resoluciones posteriores han insistido y se insiste cada vez con más énfasis en esa interpretación restrictiva, hablándose de la necesidad de indicios fundados o serios (AATS 14 de noviembre de 1996 o de 15 de febrero de 2002 , dictado éste en la causa especial 3880/2000); o de una imputación clara y concreta (AATS 15 de septiembre de 1999 -causa especial 2310/1999- o 3 de noviembre de 1999 -causa especial 2670/1999); o de apoyo probatorio (ATS de 16 de marzo de 1998).

La STC 69/2001, de 17 de marzoJurisprudencia citadaSTC, Pleno, 17-03-2001 (STC 69/2001) se hace eco de esa línea jurisprudencial, teniéndola por correcta desde el punto de vista constitucional:

Insiste en " que no basta para la operatividad de la prerrogativa de aforamiento del art. 71.3 CE la mera imputación personal, sin datos o circunstancias

que la corroboren, a un aforado, requiriéndose la existencia de indicios fundados de responsabilidad contra él, dado que los aforamientos personales constituyen normas procesales de carácter excepcional que, por tal circunstancia, deben ser interpretadas y aplicadas restrictivamente". [...]

"No es suficiente por tanto que aparezca mencionado un aforado o que se aventure la posibilidad de que en el curso de la investigación surjan datos incriminatorios más robustos contra él. Es necesario que se detecten indicios de responsabilidad que conlleven la necesidad de dirigir el procedimiento contra el aforado. Cuando los únicos investigados son aforados es lógica mayor proclividad a asumir desde los primeros momentos la competencia. Cuando aparecen implicaciones de aforados y no aforados, se viene a exigir que los indicios surgidos frente a aquéllos reúnan cierta solidez para afirmar la competencia del Tribunal Superior: el carácter excepcional del fuero -argumenta el ATS de 4 de enero de 2002(causa especial 6/2001)- "justifica el que esta Sala venga exigiendo, cuando se imputan actuaciones criminales a un grupo de personas y alguna de ellas tiene el carácter de aforado, no sólo que se individualice la conducta concreta que respecto a este aforado pudiera ser constitutiva de delito, sino también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación como persona concreta (véanse los AATS de 26 y 29 de enero de 1998 y 7 de octubre de 1999 , entre otros)". El ATS de 5 de diciembre de 2001, recaído en la misma causa especial, llega a afirmar casi con visos de generalización que "cuando se imputan acciones criminales a diversas personas y sólo una de ellas es aforado, procede iniciar la investigación por aquellos que no gozan de fuero o privilegio".

En consecuencia, y a tenor de lo expuesto, procede devolver las actuaciones al órgano de procedencia para que sigan su curso procesal.

PARTE DISPOSITIVA:

Que debemos acordar y acordamos devolver las actuaciones de las que dimana esta resolución al órgano judicial que en su día lo remitió a fin de que prosiga en el mismo, por el momento, la instrucción de la causa.

Notifíquese esta resolución al denunciante y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra el presente auto, cabe recurso de Súplica ante esta Sala en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la última notificación a los que sean parte.

Así lo manda y firma la Sala de la Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.